

(In)útiles para los escolares

Ojalá no pasara desapercibida la noticia de que la Junaeb, a la altura de julio, aún no entrega los lápices, reglas, gomas y cuadernos que debía distribuir en marzo, al inicio del año escolar. Dos millones de estudiantes, los más pobres de Chile, han cursado el semestre que termina, sin contar con elementos básicos para aprender o han debido cargar a sus familias con la compra de material que debía proveerles el Estado.

El debate acerca de las causas y los responsables será nuevamente ese pantano de acusaciones y excusas que ha terminado por fastidiar a todos con la política. El hecho cierto que nos trae la noticia es que el Estado no ha tenido la capacidad de cumplir con esta elemental obligación. Algunos propondrán privatizar, pero no todo puede ser privatizado, la educación pública no debe serlo. No queda otra que hacernos cargo del Estado, hasta lograr que sea eficiente.

Por otra parte, se calcula que cerca de 300 mil niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema escolar. Por cada doce que están matriculados, uno ni siquiera se registra como ausente cuando pasan lista. Unos tres están desaparecidos en cada curso. Nadie sabe dónde, en qué y a cargo de quién están. No conozco estudios que caractericen a quienes no asisten a la escuela; pero no resulta aventurado suponer que la gran mayoría de ellos son pobres; que una porción significativa carece de adultos que los cuiden, contengan y cobijen, y no pocos seguramente padecen enfermedades mentales. En la calle y con esas condiciones, una porción muy significativa debe estar encontrando protección y pertenencia en bandas criminales. No

por nada aumenta significativamente el número de menores entre los detenidos en flagrancia delictual.

¿Qué hace el Estado por el reingreso? La experiencia de algunas ONG muestra que volver a integrar a estos niños y jóvenes requiere de condiciones especiales; de escuelas menos masivas y mucho más personalizadas que las habituales. El Estado carece de estas escuelas especiales. Ha sido indolente o incapaz de replicar masivamente las experiencias exitosas que algunas fundaciones han podido mostrar. No sin razón y posiblemente con algo de decepción y rabia, directivos del Hogar de Cristo sugerían hace unas semanas al Presidente, en este mismo diario, que no era neces-

sario viajar a Suecia para conocer experiencias exitosas de recuperación de jóvenes desde carreras delictuales.

Por su parte, el ausentismo escolar no cesa, en cifras que se dispararon en la pandemia y mejoran, pero sin llegar a recuperarse. Esta se considera grave cuando el estudiante asiste a menos del 85% de las jornadas educativas. Las cifras de 2023 indican que el 35% de los estudiantes estaba en esa categoría, quince puntos más que la que

había antes de la pandemia. Las campañas estatales no parecen estar dando los resultados necesarios.

La violencia escolar también aumenta. Las denuncias recibidas el año pasado por la Superintendencia de Educación Escolar fueron más de 12.500, un 5% más que el 2022. El gobierno anterior lo enfrentó con el plan "aula segura"; el actual ha presentado un proyecto de ley "de convivir en las comunidades educativas". El mensaje, políticamente correcto, es pletórico de bellas palabras que parecen atropellarse unas a otras, al punto de

dejar corto al mismo diccionario, acerca del clima que debiera reinar en cada establecimiento.

Al oscuro panorama no puede dejar de sumarse a los alumnos que perdieron meses de clases en Atacama por un mal diseño en el sistema de ingreso.

Ni la OCDE ni las Naciones Unidas ni el Fondo Monetario Internacional tienen indicadores para medir la decencia de un país, pero no parece errado decir que ella se muestra en la manera en que el colectivo de los adultos y el Estado trata a sus niños. La buena implementación de las políticas de educación que hicimos bien y nos enorgulleción en los siglos XIX y XX debiera avergonzarnos en el XXI. Más preocupante aún es que no lo estemos.

Ojalá no sigamos proclamando el derecho a la educación, ni escribiendo altisonantes discursos sobre los derechos de los niños si no somos capaces de enfrentar estos problemas, si no somos siquiera capaces de llegar con los lápices cuando los escolares los necesitan. ■



DIFÍCILMENTE PODEMOS LLAMARNOS UN PAÍS DECENTE SI NO SOMOS CAPACES DE GESTIONAR UNA POLÍTICA PARA NUESTROS ESCOLARES.

JORGE CORREA SUTIL